

Retos y limitantes de la iniciativa ciudadana como mecanismo de participación a nivel subnacional en México (un estudio del 2004 al 2020).¹

Resumen.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar por medio del método comparado un análisis normativo y empírico de la iniciativa ciudadana. Partiendo de una breve contextualización del surgimiento de dicho mecanismo de participación ciudadana en América Latina, después analizando brevemente su incorporación y uso a nivel nacional en México, para posteriormente analizar con mayor detalle su reglamentación en las 32 entidades del país, con la finalidad de conocer sus similitudes, diferencias y limitantes. El segundo objetivo del presente trabajo tiene como finalidad conocer cuantas iniciativas ciudadanas a nivel subnacional han sido presentadas y aprobadas por los congresos locales, sobre que temáticas y qué tipo de actores promueven dichos mecanismos, todo ello tras realizar una búsqueda en las gacetas parlamentarias de los 32 Estados con la limitante temporal hasta el 2020. La pregunta que motiva el presente trabajo radica en conocer ¿por qué la regulación de las iniciativas ciudadanas a nivel local limita su constante activación por parte de la ciudadanía?, y una vez activado dicho mecanismo ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la ciudadanía al promover este mecanismo de participación ciudadana a nivel local?

1. Introducción.

Se reconoce que actualmente nos encontramos ante una crisis de la democracia representativa, y para ello, es importante señalar que existe una corriente teórica bajo la cual se puede analizar esta crisis de la democracia -no siendo la única- y la cual se utiliza en el presente trabajo. Siendo la propuesta de C. B. Macpherson quien piensa que “la crisis es producto de las desigualdades causadas por la falta de participación, su propuesta consiste en incrementar la forma en la que los ciudadanos intervienen en política” (Nino, 1997: 214). Siguiendo la vertiente de Macpherson y buscando dar respuesta a algunas de las causas que propician la falta de participación. La tesis de Gaetano de Mosca argumenta que en todas las sociedades existen dos clases de personas, la de los gobernantes y la de los gobernados, y la

¹ Pedro Lucio López, Licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP, Maestro en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis, estudiante de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Ciudad de México, México. (pedroluciolopez@politicas.unam.mx).

primera siempre es la menos numerosa y monopoliza el poder (1936: 83). Por otra parte, en la ley de hierro de la oligarquía se asegura que “la democracia conduce a la oligarquía” (Michels, 1912: 8).

Encontramos en dichas afirmaciones dos de los principales problemas que han surgido en la democracia representativa y que la ciudadanía denuncia constantemente. Estas son la oligarquía, expresada en poco acceso a los cargos de elección popular, la creación de partidos políticos cerrados y destacando la existencia de un sistema donde el ciudadano tiene poca incidencia en la toma de decisiones políticas y gubernamentales. El segundo problema, siendo este el monopolio del poder que trae como consecuencia otra serie de fenómenos políticos negativos para el sistema político como la corrupción, el compadrazgo, el mal manejo de recursos públicos, por mencionar algunos ejemplos.

Es importante considerar que en las democracias representativas los sectores sociales menos favorecidos y las minorías no logran que sus intereses sean representados en el sistema político con la misma facilidad que el de los sectores mayoritarios o económicamente más prósperos (Santos y Avritzer, 2004: 35-74). Con este argumento se puede encontrar una primera, aunque no única justificación a la existencia de los diferentes mecanismos de participación ciudadana -de la democracia participativa, deliberativa o directa-, ya que posibilitan que dichos sectores menos favorecidos y minorías puedan posicionar en la agenda pública y política temas no considerados por los actores políticos y gubernamentales.

Derivado de esta crisis de la democracia representativa surge la interrogante, ¿se puede subsanar esas debilidades y recomponer ese lazo de comunicación y relación entre gobierno y sociedad?, a manera de propuesta, la participación ciudadana encuentra un fundamento en la crisis de eficacia del Estado y surge como una alternativa para la construcción de consenso y como un medio para contener la discrecionalidad de la burocracia (Cunill, 1991: 12). Con el anterior planteamiento se puede inferir que desarrollando una participación ciudadana efectiva se podría subsanar esa crisis de la democracia representativa.

Como se detalló anteriormente, se reconoce que existen diferentes mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, de la democracia participativa tenemos al presupuesto participativo, la planeación participativa o el ayuntamiento abierto. De la democracia deliberativa tenemos a los consejos consultivos, la comparecencia pública o la asamblea popular. Y de la democracia directa tenemos al referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la consulta y la iniciativa ciudadana (también se le

conoce como iniciativa legislativa popular o de agenda). Reconociendo que el presente trabajo se centra en el análisis de este último mecanismo, al permitir que la ciudadanía pueda desde su visión y necesidades proponer cambios normativos que terminarán impactando en la realidad de la ciudadanía.

Pero ¿qué es la iniciativa ciudadana?, en el contexto mexicano, “la iniciativa popular o ciudadana se define como un derecho reconocido a los ciudadanos para proponer leyes y que estas iniciativas tengan el tratamiento ordinario que establece la Ley, su discusión y aprobación o rechazo” (Rivera, 2003). Además, se pueden clasificar en constitucionales o legislativas, ya sea porque modifican textos de la Constitución o bien, porque modifican, derogan o crean leyes secundarias. Además, se pueden catalogar como simples o formuladas, siendo las primeras las que se resumen a una simple petitoria de legislación por parte de la ciudadanía al Congreso sobre un tema específico. Y las segundas. se refieren a que los ciudadanos presentan de manera completa un proyecto de Ley compuesto por exposición de motivos, articulado a reformar, códigos implicados, artículos transitorios, etc., (Vásquez, 2010: 1).

2. Precisiones metodológicas.

El presente trabajo es una investigación de carácter cualitativo, en donde la principal fuente de información es por medio de fuentes secundarias. La recolección de la información se dividió en dos etapas, en primer lugar se realiza una breve investigación del marco normativo nacional sobre la iniciativa ciudadana, posteriormente mediante un estudio comparado se analiza la reglamentación de este mecanismo de participación ciudadana analizando la reglamentación en las 32 entidades del país, obteniéndose información de las constituciones locales, leyes de participación ciudadana, reglamentos, y leyes orgánicas de los congresos locales, se procedió a identificar cuáles son las características de este instrumento definido por la normatividad, cual es el concepto utilizado -iniciativa popular o ciudadana-, su umbral de activación, si el ciudadano puede participar en el proceso de dictaminación, las temáticas permitidas, su procedimiento y financiamiento.

En un segundo momento, se procedió a recolectar información por medio de la consulta de las gacetas parlamentarias de los 32 Estados del país, con limitación de tiempo hasta el mes de junio del 2020, aunque cabe señalar que en algunas gacetas parlamentarias solamente se encontraba información de la legislatura en funciones y para pocos casos fue posible consultar gacetas parlamentarias de legislaturas pasadas. Para aquellas iniciativas en donde se detalla en su gaceta parlamentaria que fueron aprobadas,

se consultó y contrastó la información con notas periodísticas en portales electrónicos de medios locales, para que se pudiera brindar más información sobre el contenido de la iniciativa.

3. Análisis normativo de la iniciativa ciudadana: su regulación a nivel Latinoamérica, México y Subnacional.

En Latinoamérica la existencia de este mecanismo de participación ciudadana a nivel nacional se encuentra vigente en 12 constituciones de la región, siendo Argentina, Bolivia -solamente la menciona, pero no incluye criterios de su regulación-, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Desde la literatura en los pocos estudios comparados que se han realizado en la región se les denomina a este mecanismos como iniciativa legislativa popular -del tipo indirecto- en donde la ciudadanía propone la modificación al marco normativo -ya sea para leyes o para la constitución según sea el caso- y es el órgano legislativo el encargado de dictaminar su aprobación o rechazo, aunado a lo anterior en todos los casos para que la ciudadanía pueda presentar dicha propuesta necesita validar un porcentaje de firmas por parte de las y los ciudadanos que forman parte del cuerpo electoral o del padrón electoral (dicho porcentaje varia de un país a otro).

En México este mecanismo de participación ciudadana se encuentra reglamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el año 2012, y aunque han existido diversos intentos por ser activada (según el reporte de expedientes remitidos al Instituto Nacional Electoral hasta el mes de marzo del 2022 han sido presentadas 21 propuestas de iniciativas ciudadanas para verificar el cumplimiento del porcentaje de firmas),² sin embargo a nivel nacional solamente existe una experiencia que culminó con todo el proceso hasta concluir con su aprobación, siendo el caso de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 en el año 2016, siendo este el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, la academia y ciudadanía.³ Sin embargo, es importante destacar que este instrumento no se encuentra regulado con mayor precisión en algún reglamento, lineamientos o en alguna Ley, como por ejemplo si ocurre con otro mecanismo de democracia directa como es la consulta popular (Ley Federal de Consulta Popular) o la revocación de mandato (Ley Federal de Revocación de Mandato). A continuación, se detallan artículos constitucionales que regulan a la iniciativa ciudadana:

² De las 21 iniciativas presentadas, 15 cumplieron con el porcentaje de firmas de apoyo estipulado por la normatividad (0.13%), y 6 de ellas no cumplieron con el porcentaje de firmas.

³ Esta iniciativa promueve que la ciudadanía exija a servidores públicos, legisladores, líderes de partido y candidatos a cargos de elección popular la publicación voluntaria de tres documentos: declaración patrimonial (1), declaración de intereses (2) y comprobante de pago de impuestos (3).

Tabla número 1. Marco jurídico mexicano que reglamenta a la iniciativa ciudadana a nivel nacional.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	
Artículo 35	Son derechos del ciudadano iniciar leyes.
Artículo 73	El Congreso tiene facultad para legislar sobre iniciativa ciudadana.
Artículo 116	Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.
Se reconoce este derecho de los ciudadanos cuando se respalde con el apoyo del 0.13% de la lista nominal de electores.	

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las definiciones incorporadas en las leyes locales de los 32 Estados de México sobre la iniciativa ciudadana queda de manifiesto que es el derecho que tiene el ciudadano para presentar iniciativas ante el órgano legislativo local y modificar el marco normativo, reconociendo que el presentarla no garantiza su aprobación. Sin embargo, sí permite ampliar la agenda legislativa y poner en la agenda pública temas de interés para los ciudadanos, en el análisis legal de este mecanismo se recogieron seis elementos comunes que permiten caracterizar a este instrumento:

Tabla número 2. Conceptualización de la iniciativa ciudadana desde las leyes locales.

Elemento	Descripción
Participación del ciudadano	Facultad personal o grupal de la ciudadanía para presentar propuestas de proyecto de ley o de decreto.
Marco legal aplicable	Constitución Local, Leyes locales, reglamentos, Códigos, decretos, normas administrativas, según lo especifique cada ley local.
Principal actor involucrado	El proceso legislativo lo realiza el Poder Legislativo local, así como aprobar o rechazar la iniciativa ciudadana. En el caso de la validación de firmas -umbral de activación- en la mayoría de los Estados corresponde esta función a los órganos electorales ya sea el INE o el OPLE.
Condicionante	Que sean leyes o marco jurídico vigente.
Acciones generadas	Crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar.
Ámbito de competencia	Estatual o municipal según lo reglamente la ley local.

Fuente: Elaboración propia con base en leyes locales de participación ciudadana.

Respecto a la iniciativa la cual es reglamentada e incorporada en las 32 entidades del país, se encontró que en la mitad de los Estados la reglamentan y denominan iniciativa ciudadana y la otra mitad como iniciativa popular, aunque el uso que le dan a ambas expresiones es con el mismo objetivo en su marco legal. Se resalta la importancia de concretar en una sola forma de definir a este mecanismo para evitar confusiones, pensando principalmente en los ciudadanos que muchas de las veces desconocen los términos jurídicos o técnicos.

Tabla número 3. Uso del concepto de iniciativa ciudadana o iniciativa popular.

Iniciativa Popular	Iniciativa Ciudadana
Chiapas	Aguascalientes
Coahuila	Baja California
Colima	Baja California Sur
Durango	Campeche
Guanajuato	Chihuahua
Guerrero	Ciudad de México
Morelos	Estado de México
Nayarit	Hidalgo
Nuevo León	Jalisco
Puebla	Michoacán
Sonora	Oaxaca
Tabasco	Querétaro
Tamaulipas	Quintana Roo
Tlaxcala	San Luis Potosí
Yucatán	Sinaloa
Zacatecas	Veracruz

Fuente: Elaboración propia con base en las leyes locales de participación ciudadana.

En un análisis normativo más detallado sobre la iniciativa ciudadana, es importante destacar que tiene una cobertura total en las 32 entidades, incluida ya sea en la Ley de Participación Ciudadana local o en la Constitución local de los Estados. Respecto a la iniciativa ciudadana o popular por su naturaleza es

promovida por aquellos habitantes de las entidades que se les reconozca como ciudadanos⁴, siendo esta característica uno de sus elementos distintivos, por ello, en este mecanismo se buscó conocer si se faculta al ciudadano a participar en el proceso legislativo para dictaminar la iniciativa, permitiendo así defender su propuesta y brindar argumentos en la comisión dictaminadora. Se identifica que solamente 14 entidades siendo Yucatán, Veracruz, Sonora, Tabasco, Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Campeche y Aguascalientes han reglamentado que el ciudadano puede participar -con derecho a voz- en la discusión de la iniciativa en la comisión dictaminadora. En Oaxaca su legislación establece que no podrá participar en el proceso legislativo de dictaminación y en los 17 Estados restantes no especifica si se faculta al ciudadano participar o no (Lucio, 2021:77).

Respecto a la reglamentación del proceso de la iniciativa ciudadana, 29 entidades del país regulan el proceso, es decir, brindan detalles sobre aspectos como dónde se tiene que presentar, cuáles son los requisitos y documentación solicitada, criterios para presentar la iniciativa, el proceso de dictaminación, entre otros, pero, para los casos de Estado de México y Nuevo León se identificó que no detalla los elementos necesarios para describirlo y San Luis Potosí de la misma manera carece de elementos descriptivos aunque se pueden encontrar fundamentos de su procedimiento en el reglamento interno o en la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Lucio, 2021:80-81).

Sobre la obligatoriedad para la publicación en el periódico oficial del Estado de las iniciativas ciudadanas aprobadas, lo cual garantiza que sea reconocida y que tendrá validez, solamente 7 entidades siendo San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero, Ciudad de México, Coahuila, Campeche y Aguascalientes reglamentan explícitamente que una vez aprobada la iniciativa deberá ser publicada, en Zacatecas no es vinculante, en Puebla, Yucatán y Estado de México no especifica información sobre esta variable y en los 21 Estados restantes no es explícito, ya que mencionan que la iniciativa se sujetará al procedimiento correspondiente que determine la Ley Orgánica o el Reglamento Interno del Congreso, y reconociendo que todo proceso de iniciativa concluye con su publicación o promulgación. Sin embargo, surge la necesidad de que la obligatoriedad de su publicación sea reglamentada explícitamente en la normatividad local que regula a dicho mecanismo (Lucio, 2021:81-82).

⁴ Los ciudadanos que pueden iniciar iniciativas ciudadanas son aquellos que vivan en la entidad, sean mayores de edad, gocen de sus derechos, etc.

Sobre el financiamiento de la iniciativa ciudadana solamente 6 entidades detallan criterios sobre el financiamiento, siendo Jalisco, Querétaro y Michoacán, estipulando que las autoridades deberán prever en su presupuesto de egresos una partida para cuando consideren relevante promover algún mecanismo de participación ciudadana -aunque no especifica qué mecanismos-, en Tabasco y Morelos estipula que el Instituto Electoral Local deberá prever en su anteproyecto de presupuesto de egresos los recursos estimados y en Aguascalientes define que serán financiados por sus iniciadores, siendo ciudadanos, los gastos los erogará el Instituto Estatal Electoral, en la Ciudad de México no es clara la regulación de esta variable y en las 25 entidades restantes no incluyen elementos (Lucio, 2021:83).

Sobre los umbrales de activación de la iniciativa ciudadana en la siguiente tabla se detallan los porcentajes de firmas solicitados para que dicha propuesta cumpla con uno de los principales requisitos para ser presentada al Congreso local de la entidad correspondiente, este porcentaje requerido es con base en la lista nominal de electores, y cabe señalar que el concepto de “personal” hace referencia a que el mecanismo puede ser activado de manera individual por el ciudadano, sin pedir un aval de firmas, lo cual aplica para los estados de Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala. Aquellas entidades donde se presenta el signo (*), corresponde a aquellas en donde se estipulan dos umbrales, el primero de ellos hace referencia para leyes y el segundo para la Constitución local. Una de las principales reflexiones radica en que no existe una justificación para determinar dicho umbral, como se verá más adelante existen umbrales demasiado bajos y en otros casos umbrales demasiados altos (Lucio, 2021:78-80).

Tabla número 4. Umbrales de activación de la iniciativa ciudadana o popular.

	Entidad	Número de firmas solicitadas
1	Aguascalientes	(1%)
2	Baja California	(500 ciudadanos)
3	Baja California Sur	Personal
4	Campeche	(0.13%)
5	Chiapas	(1%)
6	Chihuahua	(0.1%)
7	Ciudad de México	(0.13%)
8	Coahuila	Personal
9	Colima	(0.13%)

10	Durango	(0.5%)
11	Estado de México	Personal (da a entender)
12	Guanajuato	(0.5%)
13	Guerrero	(0.2%)
14	Hidalgo	(0.13%)
15	Jalisco	(0.05%)
16	Michoacán	Personal
17	Morelos	* (1% y 2%)
18	Nayarit	(5%)
19	Nuevo León	Personal
20	Oaxaca	Personal
21	Puebla	(2.5%)
22	Querétaro	Bajo* (1% y 3%)
23	Quintana Roo	Personal
24	San Luis Potosí	Personal
25	Sinaloa	Personal
26	Sonora	(1%)
27	Tabasco	(10%)
28	Tamaulipas	(0.13%)
29	Tlaxcala	Personal
30	Veracruz	(0.13%)
31	Yucatán	(0.3%)
32	Zacatecas	(500 ciudadanos)

Fuente: Lucio, L. Pedro. (2021). Análisis comparativo sobre la regulación de los mecanismos de participación ciudadana de la democracia directa en las 32 entidades de México. En Pérez Vega Moisés, (coord.) Mecanismos de participación ciudadana en México, México, Comisión Estatal Electoral de Nuevo León CEE pp 63-90

También se procedió a analizar cuáles son las temáticas permitidas y no permitidas para activar a la iniciativa ciudadana o popular, destaca el hecho de que en la totalidad de las entidades lo vinculado a la organización del Estado y el tema de las finanzas públicas son temas que no pueden ser discutidos por los ciudadanos por medio de este mecanismo, y aunque en algunos casos se han presentado iniciativas

con estos temas, se han dictaminado como improcedentes al ser temáticas no permitidas, por lo cual dichos temas solo le confieren a los representantes populares.

Tabla número 5. Temáticas permitidas y no permitidas en la iniciativa ciudadana.

Temáticas de la iniciativa ciudadana	
1.Temas permitidos.	Se puede activar cuando se hace referencia al marco normativo local vigente.
Casos para destacar.	Veracruz y Campeche hacen referencia de que la materia sobre la que se presenta deberá ser competencia del Congreso, en Colima deberá de ser competencia estatal y en Baja California Sur será procedente este mecanismo cuando haga referencia a la Ley o Código que otorgue derechos o imponga obligaciones a la generalidad de las personas.
2.Temas no permitidos.	Limita derechos humanos, temas fiscales, presupuestarios o tributarios, lo relacionado al régimen interno de la Administración Pública Estatal, materias derivadas de reformas a la Constitución Política Federal y temas vinculados a convenios con la federación u otros Estados y lo relacionado a tratados internacionales.
Casos para destacar.	Zacatecas específica que lo relacionado a expropiación de bienes, Aguascalientes lo vinculado con acciones afirmativas, en la Ciudad de México señala que la materia penal, en Jalisco lo relacionado a organismos descentralizados y paraestatales, Quintana Roo nombramiento de servidores públicos, Morelos y Tabasco la designación del Gobernador Interino y en Nayarit, Quintana Roo y Aguascalientes lo relacionado a la materia electoral.

Fuente: elaboración propia con base en el marco normativo de cada entidad.

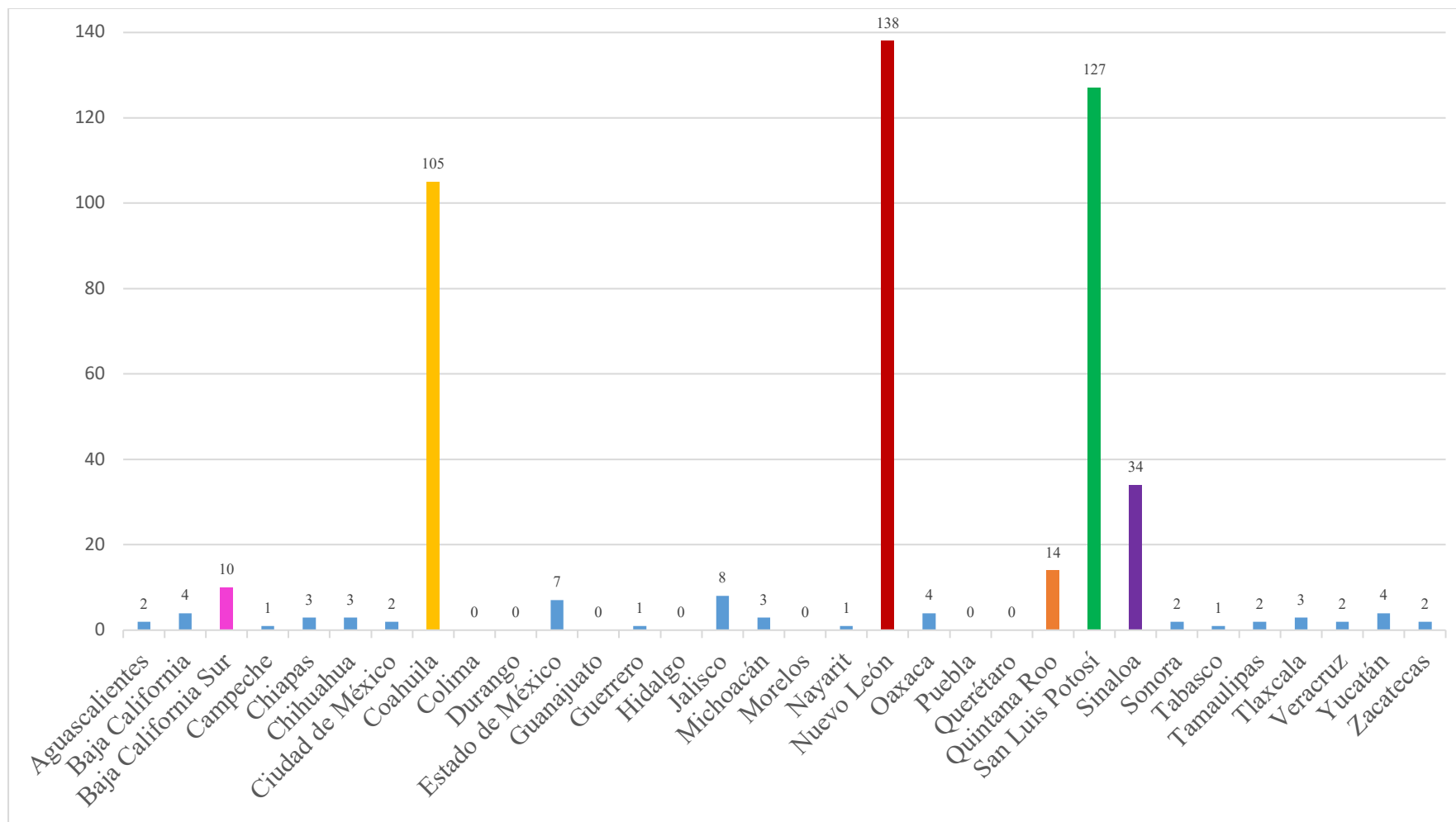
4. Estudio de casos de las iniciativas ciudadanas presentadas en las 32 entidades del país.

Se realizó la recolección de información por medio de notas periodísticas, y principalmente se consultaron los portales electrónicos del poder legislativo de cada entidad -gaceta parlamentaria-, encontrándose que hasta el mes de junio del 2020 han sido presentadas 483 iniciativas ciudadanas a nivel local distribuidas en las diversas entidades del país, aunque con ello no implicó que fueran aprobadas o en su caso discutidas por las y los diputados, y encontrándose que varía la temática de dichas iniciativas.

Reconociendo la limitante de información, se identificó un primer antecedente el cual surge en el año 2004 en Jalisco, donde un ciudadano llamado Gilberto Parra Rodríguez activó este mecanismo para establecer el derecho de pensión a adultos mayores de 70 años, la iniciativa quedó “congelada”⁵ en el Congreso, es decir, pendiente de dictaminar y en 2017 el ciudadano presentó una nueva iniciativa en el mismo sentido solicitando trato digno y beneficios sociales a los adultos mayores, propuesta avalada con 4,000 firmas. La cantidad de iniciativas ciudadanas presentadas se desglosan por cada Entidad en la siguiente tabla.

⁵ Se le denomina así, haciendo referencia a que una vez que la iniciativa fue presentada ante el poder legislativo, no se le dio un proceso para que fuera discutida en la respectiva comisión dictaminadora, ya que el ciudadano no pudo contar con los mecanismos legales o institucionales para poder impulsar y promover su iniciativa.

Gráfico número 1. Cantidad de iniciativas ciudadanas promovidas en cada Estado.



Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de la Gaceta Parlamentaria de los Congresos Locales.

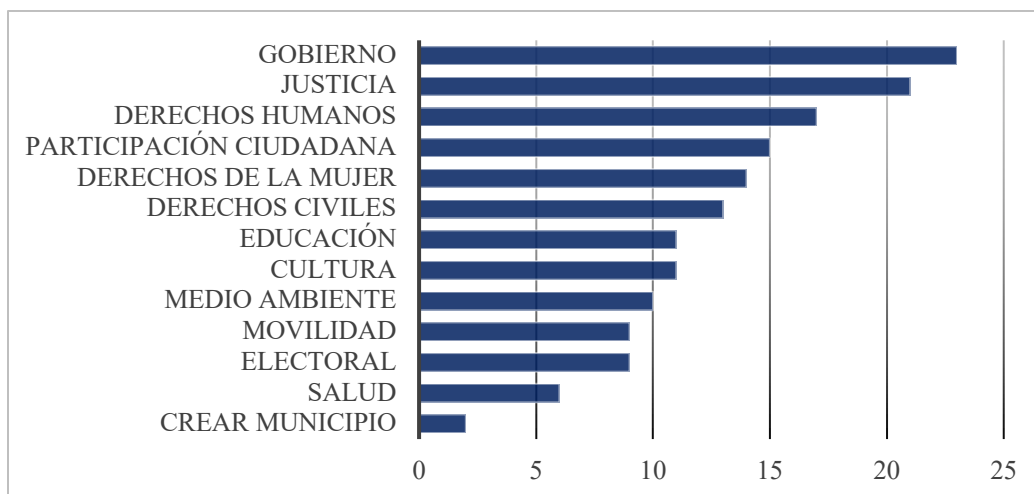
De la presente investigación se encuentra que en siete de los Estados siendo Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla y Querétaro, no se logró identificar la existencia de alguna iniciativa ciudadana hasta el mes de junio del 2020, a pesar de que en las primeras cuatro entidades el umbral para activar el mecanismo es menor al 1%, en los otros tres Estados el porcentaje oscila entre el 1% y el 3%. Los tres Estados que han sido más activos en el tema son Nuevo León con 138 iniciativas, San Luis Potosí con 127 y Coahuila con 105, es importante aclarar que la limitación de tiempo que se tomó para estos tres casos fue con base en la disposición de información encontrada. Por ello, para el estudio en Nuevo León fue respecto a la LXXI legislatura del 2018 al 2021, en San Luis Potosí se tomó en consideración la legislatura LXI del 2015 a 2018 y la LXII legislatura del 2018 a 2021 y en Coahuila la legislatura LXI del 2018 al 2020.

Respecto a Coahuila siendo el tercer Estado más activo, es importante destacar una situación identificada y es que un mismo ciudadano ha presentado 79 iniciativas ciudadanas, de las cuales solamente 2 han sido aprobadas, dicho ciudadano es un joven de 26 años llamado Erick Rodrigo Valdez Rangel. Del estudio de dicho caso, surge la interrogante si verdaderamente existe un ímpetu por participar activamente por medio de la iniciativa ciudadana en Coahuila y ejercer su derecho como ciudadano, ya que en el año 2020 se registró para competir por una de las candidaturas a diputado local en un partido político.

Una de las conclusiones más importantes sobre este instrumento, es que los primeros seis Estados que tienen mayor cantidad de iniciativas son aquellos que su reglamentación ha definido que puede ser presentada de manera personal o individual, sin requerir un porcentaje de firmas que avalen la propuesta, siendo Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California Sur. Con los datos anteriores, se puede argumentar que la existencia de umbrales de activación constituye una de las principales limitantes legales para que la iniciativa sea constantemente promovida por el ciudadano. Por tal motivo, si se desea mayor participación ciudadana por medio de este mecanismo, deberán existir muy bajos porcentajes que requieran el aval de firmas o en su caso no existir y darle la facultad a cualquier ciudadano de presentar una propuesta de reforma al marco normativo local, reconociendo que ello implicaría una mayor carga laboral para los legisladores.

Como detalla la siguiente gráfica, existen trece temas sobre los cuales el ciudadano se muestra particularmente interesado en activar una iniciativa ciudadana a nivel subnacional:⁶

Gráfico número 2. Temas sobre los cuales se activa la iniciativa ciudadana.



Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de la Gaceta Parlamentaria de los Congresos Locales.

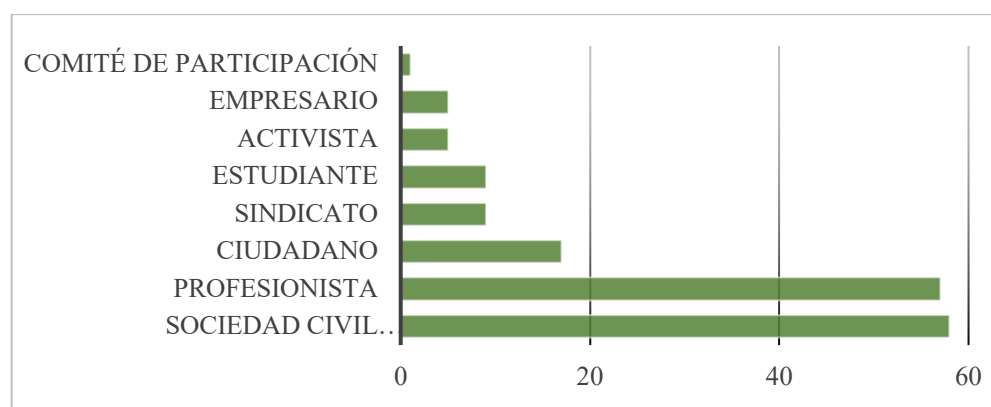
Destaca el hecho de posicionarse en primer lugar temas vinculados al gobierno y con ello se hace referencia a que se encontró que las iniciativas promovidas estaban vinculadas con modificar las leyes orgánicas de la administración pública del ámbito estatal o municipal, interviniendo también temas relacionados con las finanzas públicas del Estado y entorno a facultades conferidas a las autoridades. En segundo lugar, se encuentran los temas relacionados a la justicia, es decir, temas vinculados al código penal del Estado y particularmente se encontraron diversas iniciativas encaminadas a definir medidas protectoras para promotores de derecho humanos y periodistas.

En tercer lugar, respecto a las temáticas, aunque en algunas de las leyes que regulan a los mecanismos de la democracia directa se menciona explícitamente que los derechos humanos no están sujetos a ser materia de alguno de estos instrumentos. Por este concepto se hace referencia a que se identifica que por medio de la iniciativa se busca ampliar los derechos de los ciudadanos, encaminadas principalmente a proteger y empoderar a grupos vulnerables de la sociedad, como por ejemplo los adultos mayores, las mujeres, los niños, las personas indígenas, etc. Siendo estas las tres principales temáticas.

⁶ La muestra corresponde a 161 iniciativas estudiadas a nivel subnacional de las cuales se pudo identificar el tema sobre el cual se basaba la iniciativa ciudadana.

Por otro lado, también con el análisis de las experiencias en el ámbito subnacional, se identificó que existen ocho formas de catalogar al ciudadano que promueve la iniciativa ciudadana, prevaleciendo en la mayoría de los casos el que son promovidas por la sociedad civil organizada, es decir por organizaciones formalmente constituidas y que cuentan con recursos e información para poder promover este instrumento. En segunda instancia son promovidas por profesionistas, es decir personas que cuentan con una carrera, profesión o son servidores públicos. En tercer lugar, las promueven ciudadanos, los cuales se catalogan de esa forma debido a que no se identifica que pertenezcan a alguna de las otras categorías: ⁷

Gráfico número 3. Actores que promueven la iniciativa ciudadana.



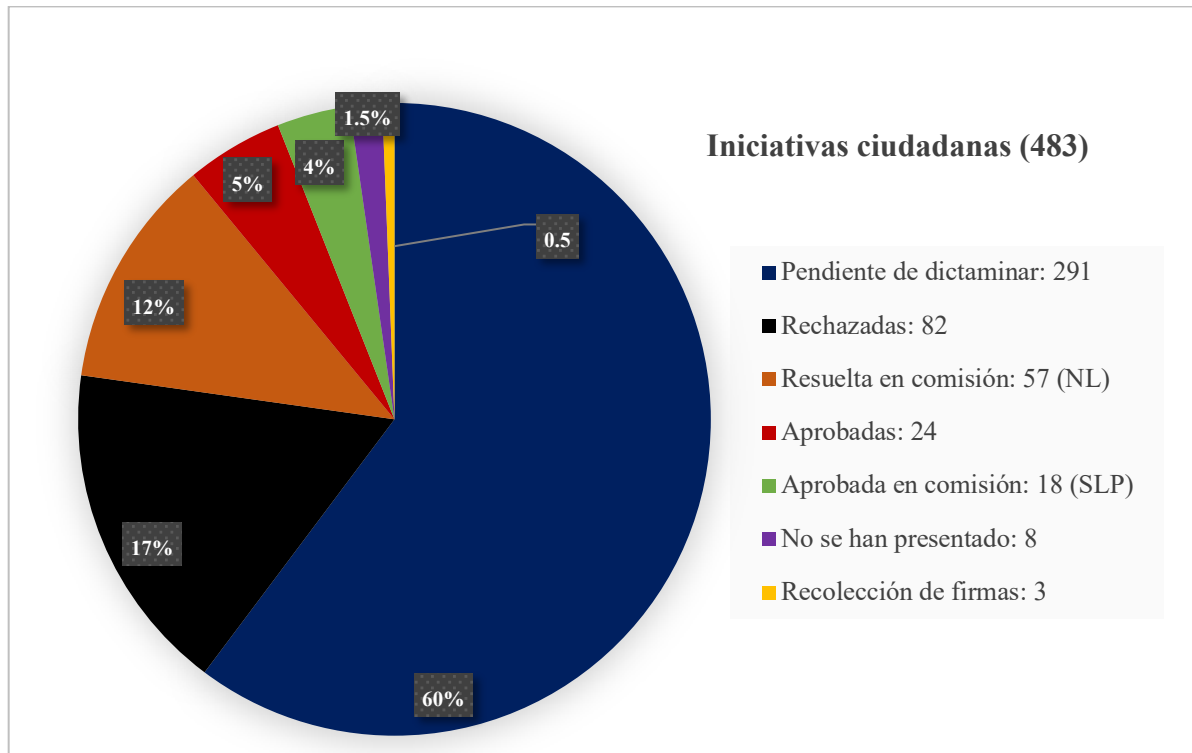
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de la Gaceta Parlamentaria de los Congresos Locales.

A continuación, también se presenta una gráfica detallando el estado en el que se encuentran dentro del proceso legislativo las 483 iniciativas ciudadanas localizadas en las gacetas parlamentarias:

Gráfico número 4. Estado en el que se encuentran las iniciativas promovidas por ciudadanos.

⁷ La muestra corresponde a 161 iniciativas estudiadas donde se pudo identificar la información o datos del promotor.

Grafica número 4. Iniciativas ciudadanas presentadas a nivel subnacional hasta el año 2020.



Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de la Gaceta Parlamentaria de los Congresos Locales.

De dicha gráfica los datos revelan que hasta el año 2020 el 60% de las iniciativas ciudadanas se encontraban pendientes de dictaminar, lo cual deja de manifiesto de que a pesar de que el ciudadano presente constantemente iniciativas al poder legislativo, surge la limitante de que los diputados no avalen la propuesta y no sea discutida, ante dicho obstáculo, surge la necesidad de que en la normatividad de los 32 Estados se estipule explícitamente que las comisiones dictaminadoras deberán permitir que el ciudadano participe con voz en la sesión correspondiente, brindando argumentos que abonen a la discusión y garanticen su debido proceso.

A su vez, aunque algunas entidades señalan un periodo de tiempo para que toda iniciativa sea dictaminada, en muchos de los casos se identifica que la norma no se respeta, e incluso entra una nueva legislatura y la iniciativa ciudadana queda congelada en el tiempo. Por ello es importante no solo definir un plazo de tiempo en la ley para que sea dictaminada, sino, además, es importante que el ciudadano conozca que puede hacer valer su derecho político por medio de los tribunales electorales locales y exigir que sea dictaminada (es decir, que existan medios de impugnación establecidos en la normatividad).

Lo anterior ocurrió en los casos de Sinaloa en una iniciativa promovida por José Guadalupe Carrillo Osorio en donde el Tribunal Electoral solicita que se dé el estatus de la iniciativa llamada sin voto no hay dinero, también en el año 2018 en dicho Estado diversas organizaciones de la sociedad ganan una demanda por protección de derechos políticos ante el Tribunal Estatal Electoral, incluso aprobando finalmente la iniciativa que buscaba mayor transparencia en el Poder Legislativo, y también en San Luis Potosí en el año 2018 José Mario de la Garza obtiene una sentencia del Tribunal Electoral Estatal solicitando que las iniciativas sean dictaminadas ante la ausencia del debido procedimiento marcado por la Ley.

Por otra parte, se encontró que el 17% de estas iniciativas han sido rechazadas, sin señalar en la dictaminación los motivos de su improcedencia, y en el caso de Nuevo León se encontró que en 57 de las iniciativas se detalla que fue resuelta en comisión, pero no define si fue votada en pleno y aprobada o rechazada, en San Luis Potosí igualmente en 18 iniciativas se detalla que fue aprobada en comisión, sin encontrar información que ayude a conocer si la iniciativa fue aprobada o rechazada por los diputados. Del 5 % que se tiene la seguridad que fueron aprobadas en la comisión dictaminadora y en pleno del Congreso, corresponde a 24 iniciativas que a continuación se desglosa cada una de ellas, detallando la propuesta y el impacto en la entidad.

Reconociendo que en la mayoría de los casos las propuestas contribuyen a ampliar los derechos de la ciudadanía y sectores vulnerables, sin embargo, el estudio de sus efectos requeriría realizar estudios de caso para conocer si la aprobación de dicha iniciativa implicó cambios en la realidad de la ciudadanía. Finalmente se identifica que el Estado de Coahuila y Sinaloa son los Congresos que tienen una mayor tasa de aprobación con seis y cinco iniciativas aprobadas respectivamente (y que dicho resultado puede tener diversas explicaciones desde un compromiso por parte de los legisladores para dictaminar dichas iniciativas, la accesibilidad del marco normativo, o la capacidad para incidir de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en dichas entidades).

Tabla número 6. Iniciativas ciudadanas aprobadas por el Congreso de cada Estado.

Estado	Propuesta	Dato importante	Impacto
Baja California Sur (2019)	Garantizar el principio de paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia y gabinetes	Se aprobó con reformas por parte de los legisladores.	No ha tenido un impacto, ya que un paquete de diversas reformas y leyes no han sido

	de primer nivel de Ayuntamientos.		publicadas, aunque ya fueron aprobadas por el Congreso.
	Se declararon Patrimonio Cultural del Estado las cabalgatas y el Día del Caballo.	Tuvo apoyo de una diputada perteneciente a la legislatura.	Representa una conquista para un sector determinado, no para toda la población
Coahuila (Las primeras 4 en 2019 y las ultimas 2 en el 2018)	Modificar Ley Educativa para intervención de la Procuraduría para Niños y Niñas cuando en la escuela existan indicios de violencia.	Forma parte de las 79 propuestas presentadas por el mismo ciudadano.	Brinda apoyo a un sector vulnerable de la sociedad.
	Incorporar el uso de la captación de lluvia para su mejor aprovechamiento.	Forma parte de las 79 propuestas presentadas por el mismo ciudadano.	Contribuye al medio ambiente y evita el mal uso del agua.
	Reforma la Ley de Hacienda para eliminar la figura del reemplacado si no es por pérdida o cambio de residencia.	A pesar de estar vinculada con temas fiscales es aprobada.	Contribuye a evitar el proceso burocrático y erogar gastos del procedimiento.
	Reforma al Estatuto de los Trabajadores del Estado para incorporar estudios de cáncer.	Establece la obligatoriedad para que la mujer se realice estudios una vez al año.	Aunque beneficia a un sector particular de la población, ayuda a ampliar sus derechos laborales y prevenir enfermedades.
	Modificación a la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública.	Busca definir reglas claras del servicio médico para maestros	Beneficia a un sector específico de la población.
	Modificar Ley Estatal de Salud para establecer que vendedores deben ofrecer agua purificada de	Pasaron dos años para su aprobación.	Garantiza el derecho humano al agua.

	manera gratuita, solo la embotellada se cobrará		
Oaxaca (2019)	Reforma a Ley Orgánica para contribuir a la igualdad de género en los cargos del Ayuntamiento de Oaxaca.	El diputado del PT brindó apoyo en el proceso legislativo.	Contribuye a romper el techo de cristal que sufren las mujeres en entidades públicas.
Quintana Roo (2020-2018)	Declaró 21 de septiembre como Día Estatal de la Paz.	Promocionada por las organizaciones de la sociedad civil.	Ayuda a generar conciencia sobre el tema en la sociedad.
	Paridad de género en el sector público.	Es necesario que sea aprobada por los ayuntamientos.	Contribuye a romper el techo de cristal que sufren las mujeres en entidades públicas.
San Luis Potosí (2017-2016)	Reformar la Ley Electoral para incluir un 20% de candidatos jóvenes menores de 29 años en las listas de regidurías de R.P.	Fue apoyada por algunos legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.	Aumentar los niveles de participación política de las juventudes.
	13. Estipula la certificación profesional de enfermería.	Tuvo el apoyo de la diputada de Movimiento Ciudadano.	Profesionalización de la enfermería.
Sinaloa (2018, 2018, 2017, 2016 y 2013)	Reforma la Ley de Profesiones para precisar la definición de perito profesional, así como establecer el grado académico.	Fue presentada en el 2017 y ratificada la propuesta en el 2018.	Logra la profesionalización del perito.
	Expedir Ley que Garantiza la Entrega de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares Gratuitos inscritos en las escuelas públicas del sistema de educación básica.	Fue aprobada por unanimidad.	Ayuda a sectores vulnerables económicamente para subsanar dichos gastos.

	Establece que los ciudadanos promotores de iniciativas ciudadanas por dictaminar asistan a las reuniones de las Comisiones.	Presenta oficio solicitando que se dictamine en el 2018 tras quedar congelada	Ayuda a aumentar las posibilidades para que la iniciativa ciudadana sea aprobada.
	Eliminar el carácter “privado” de las reuniones que celebran los diputados en comisiones y crear Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.	Fue aprobada con reformas por unanimidad después de ganar en el 2018 demanda por omisión ante el Tribunal Estatal Electoral.	Ayuda al combate de la corrupción y a favor de la transparencia gubernamental.
	Iniciativa de Ley para el pago de aguinaldo a los jubilados y pensionados de los Servicios de Educación Pública Descentralizada.	Se tardó 5 años en ser dictaminada.	Beneficio a un sector específico de la población.
Sonora (2019)	Reforma del Código Penal para penar a servidores que cometan delito de corrupción o cohecho.	El Congreso hizo suya la propuesta al interesarle el tema.	Ayuda a mejorar las acciones para evitar la corrupción en el sector público.
Tlaxcala (2019 y 2007)	Ley Olimpia, que busca sancionar a las personas que difundan imágenes o videos con contenido íntimo.	Obtuvo apoyo de la diputada Laura Flores del PRD y del titular de la Procuraduría General de Justicia.	Es una iniciativa a nivel nacional y va enfocada principalmente a mujeres, con lo cual regula el controversial ámbito de las redes sociales.
	Reforma al Código Penal para reconocer el delito de trata de personas.	El Poder Ejecutivo presenta a la par su propia iniciativa.	Visibiliza y atiende una problemática de la entidad.

Veracruz (2008)	Crear Ley para enfrentar la epidemia de VIH/SIDA, otorgar derechos, atención y programas gubernamentales al combate.	Es la primera norma de este tipo en el país.	Se llama Ley 306, e impactó en mejores condiciones de vida y de atención para dicho sector.
Zacatecas (2011 y 2009)	Ampliar derechos de las personas adultas y estipular un apoyo económico.	Legisladores apoyan la iniciativa, pero se modifica para definir la población vulnerable.	Beneficia a un sector vulnerable de la población.
	Señala que el matrimonio es entre hombre y mujer, y busca penar el aborto cuando no sea justificado.	Grupos LGBT y sectores inconformes se manifestaron en contra.	Va en contra de la visión progresista de los derechos humanos.

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de portales electrónicos de los órganos electorales locales y notas periodísticas.

5. Reflexiones finales.

Como constatan las 24 iniciativas ciudadanas aprobadas en el ámbito subnacional que se lograron identificar hasta el año 2020, las temáticas varían drásticamente vinculándose principalmente con temas que abordan la problemática de la inequidad de género en el sector público, pero también se abordan temas como la transparencia, los derechos laborales y el acceso a la salud, cada una de estas iniciativas teniendo una población objetivo y un sector de la población específico que impacta. Sin embargo, por otra parte, a pesar de tener un alto número de iniciativas presentadas en los órganos legislativos, se encontró que son pocos los casos en donde se han aprobado dichas propuestas, surgiendo la interrogante para futuros trabajos sobre ¿qué factores institucionales y políticos contribuyen a que las iniciativas ciudadanas sean aprobadas?

La presente recolección de casos arroja algunas ideas, se identifican tres posibles causas, la primera de ellas, la relacionada a que alguno o algunos de los diputados integrantes de la legislatura apoyó pública e internamente por medio del cabildeo dicha propuesta -ya sea por voluntad política o por que se encontraba dentro de las temáticas de su agenda legislativa- lo cual facilitó el proceso de discusión y votación dentro del órgano legislativo. Una segunda posible causa se relaciona con que la iniciativa

ciudadana adquirió relevancia pública por la temática objeto de la iniciativa, lo cual funcionó como una precisión pública para que la iniciativa fuera discutida. Y una tercera causa se identifica respecto a aquellos casos en donde los ciudadanos promotores utilizaron los mecanismos institucionales disponibles para presionar al órgano legislativo.

Una reflexión surgida tras la recolección de experiencias y particularmente respecto a la identificación de los promotores de dicho mecanismo es si ¿la iniciativa ciudadana es un derecho amplio y accesible para todos los ciudadanos?, o ¿es un derecho para aquellos que cuentan con el tiempo, dinero, conocimiento y capital político para promoverla?, de ser afirmativa la segunda opción, estaríamos hablando de que este mecanismo se convertirá en un instrumento activado por ciertos sectores de la sociedad y que disponen de ciertos recursos, lo cual impactaría negativamente en el carácter ciudadano de este instrumento, considerando las brechas sociales, económicas y educativas de nuestro país.

Respecto a las temáticas objeto de la iniciativa se logra identificar que son acciones afirmativas que ayudan a ampliar los derechos de diversos sectores de la sociedad, como por ejemplo, el caso de Zacatecas que brinda el apoyo económico a personas adultas, el caso de Tlaxcala con la aprobación de la Ley Olimpia que combate la violencia digital hacia la mujer, en Veracruz con la entrada en vigor de la Ley que busca combatir institucionalmente el VIH y garantizar su oportuna atención, Coahuila garantizado la atención institucional a niños y niñas que sufren violencia y en los casos de Baja California Sur, Oaxaca y Quintana Roo en donde se establecieron medidas para garantizar la paridad de género en el sector público. Cada una de estas iniciativas tienen su valor al convertirse en acciones concretas, a su vez, reconociendo que cada una de estas experiencias vivió un largo proceso desde su presentación al órgano legislativo hasta su aprobación, y que tendrán cada una, una historia valiosa y diferente que contar.

Si se tiene como finalidad aumentar el número de iniciativas ciudadanas aprobadas, las cuales se identificó que fueron 24 de 483, resultaría innovador proponer la creación de oficinas de iniciativa popular OIP en los contextos locales, como sí ocurre por ejemplo en el caso de Paraguay (ABC Color, 2010) buscando establecer nexos estables entre la ciudadanía y el parlamento para impulsar proyectos de ley de interés público. El objetivo de estas oficinas es el de ofrecer soportes y asesoramiento técnico gratuito para la elaboración de proyectos de ley, dichas experiencias han surgido en Buenos Aires Argentina (Última hora, 2011) y en la ciudad de Asunción en Paraguay (Paraguay, 2010).

6. Referencias bibliográficas:

- Abc Color. (2010, Noviembre). Instalaran oficina de iniciativa popular, recuperado el 17 de mayo del 2020 de <https://www.abc.com.py/nacionales/instalaran-oficina-de-iniciativa-popular-179549.html> y <https://www.abc.com.py/nacionales/firmaran-convenio-para-instalar-oficina-de-iniciativa-popular-179530.html>
- Cunill, Nuria. (1991). Participación ciudadana, Caracas, Venezuela, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, pp.12-56
- Lucio, Pedro. (2021). Análisis comparativo sobre la regulación de los mecanismos de participación ciudadana de la democracia directa en las 32 entidades de México. En Pérez Vega Moisés, (coord.) *Mecanismos de participación ciudadana en México*, México, Comisión Estatal Electoral de Nuevo León CEE pp 63-90.
- Michels, R. (1912). *La sociología del partido político* nella democracia moderna, Turin, UTET; Bolonia, Il Mulino, p.8.
- Mosca, Gaetano. (1936). *Elementi di scienza politica*, Bari, Laterza, p. 83
- Nino, Carlos. (1997). *La constitución de la Democracia Deliberativa*, traducción por Roberto Saba, España, Gedisa Editorial, p. 214.
- Paraguay. (2010, Noviembre). Asunción, primer municipio en contar con una oficina de iniciativa popular, recuperado el 16 de mayo del 2020 de <https://www.paraguaymipais.com.ar/politica-paraguay/asuncion-primer-municipio-en-contar-con-una-oficina-de-iniciativa-popular/>
- Rivera, Delgadillo. (2003). *Tareas de la democracia en México*, México, Centro de Investigaciones Jurídicas, Plaza y Valdés editores.
- Santos, B. de S. y Avritzer, L. (2004) Introducción: para ampliar el canon democrático. En: Santos, *Democratizar la democracia los caminos de la democracia participativa*. México. Fondo de Cultura Económica. pp. 35-74.
- Última hora. (2011, Enero). Oficina de Iniciativa Popular de Diputados será habilitada en Buenos Aires recuperado el 16 de mayo del 2020 de <https://www.ultimahora.com/oficina-iniciativa-popular-diputados-sera-habilitada-buenos-aires-n395394.html>
- Vázquez, José. (2010). *La reforma política vista desde la investigación legislativa. Iniciativas ciudadanas*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, recuperado el 03 de mayo de 2019 de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3198/8.pdf>

Referencias del marco normativo local.

- Aguascalientes. <http://www.congresoags.gob.mx/Laws/DownloadPdf/235>
- Baja California. https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_VI/20200110_LEYPARTICIPA.PDF
- Baja California Sur. <https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1541>
- Campeche <https://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/anticorrupcion/175-constitucion-politica-del-estado-de-camp>
- Chiapas. https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0006.pdf?v=MjE=
- Chihuahua. <http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1429.pdf>
- Ciudad de México. <https://www.congresocdmx.gob.mx/marco-legal-cdmx-107-1.html>
- Coahuila. http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa112.pdf
- Colima. https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/participacion_ciudadana_02nov2019.pdf
- Durango. <http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA.pdf>
- Estado de México. <https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf>
- <https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig005.pdf>
- Guanajuato. https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/43/LEY_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_PARA_EL_EDO_DE_GTO_PO_05jul2018.pdf
- Guerrero. <http://congresogro.gob.mx/61/attachments/article/686/%EF%83%96LEY%20N%C3%9AMERO%20684%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA%20DEL%20ESTADO%20DE%20GUERRERO.pdf>
- Hidalgo. http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Participacion%20Ciudadana%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
- Jalisco. <https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes>

- Michoacán.<http://congresomich.gob.mx/file/Ley-de-Mecanismos-de-Participaci%C3%B3n-Ciudadana-del-Estado-de-Michoac%C3%A1n-de-Ocampo.pdf>
- https://www.iem.org.mx/documentos/marco_legal/reglamentacion_interna_del_iem/Reglamento%20de%20Mecanismos%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20del%20Instituto%20Electoral%20de%20Michoac%C3%A1n.pdf
- Morelos.<http://impepac.mx/wp-content/uploads/2015/09/Ley-de-Participaci%C3%B3n-CiudadanaV2.pdf>
- Nayarit.<http://ieenayarit.org/PDF/2016/LPCEN.pdf>
- Nuevo León.
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf
- Oaxaca.http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_para_el_Estado_de_Oaxaca..pdf
- https://www.congresooaxaca.gob.mx/marco_normativs
- Puebla.http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24
- Querétaro. http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY064_59_18.pdf
- Quintana Roo.<http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L1520180323160.pdf>
- San Luis Potosí. <https://congresosanluis.gob.mx/legislacion/leyes>
- http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_de_Refrendum_y_Plebiscito_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_24_May_2014.pdf
- Sinaloa. http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_participacion.pdf
- Sonora. http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_394.pdf
- Tabasco.
http://iepct.org.mx/docs/marco_legal/Ley_de_Participacion_Ciudadana_del_Edo_de_Tabasco.pdf
- Tamaulipas.<https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/Ley%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana5.pdf>
- Tlaxcala.https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Ley_de_Consulta_Ciudadana_para_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
- Veracruz. <https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LRPICCP280518.pdf>
- Yucatán. http://www.congresoyucatan.gob.mx/resultados_busqueda.php

- Zacatecas. <https://www.congresozae.gob.mx/63/ley&cual=63&tipo=pdf>